ISSN 1852 3846

SINTESIS MUNDIAL

Resumen mensual de los acontecimientos internacionales del Centro de Estudios Políticos e Internacionales de la Fundación para la Integración Federal

Agosto 2009

TENSIÓN EN SUDAMÉRICA

funif
Fundación para la Integración Federal

SÍNTESIS MUNDIAL
Agosto de 2009
ISSN **1852 3846**

PRESIDENTE de la FUNIF
Germán Krieger

COORDINACIÓN GENERAL CEPI
Carla Morasso

DIRECTOR EDITORIAL
Germán Martínez

CONSEJO EDITORIAL Y DISEÑO
Luciano Herrero
Mariana Perotti
Luciana Rodriguez

STAFF: Guillermo Borella, Graciela Capisano, Julieta Ceresole, Verónica Doval, Ornela Fabani, RománFellippelli, Ingrid Goette, Luciano Herrero, María Eugenia Kokic, Paula Liveratore,Federico Mano, Ana Carolina Molina, Juan Pablo Mordini, Emilio Ordoñez, MarianaPerotti, Noemí Rabbia, Luciana Rodríguez,Cecilia Rubio, Victoria Saenz, Mariana San Martín, Tatiana Santori, Almery Tessarolo, Romina Viale,Fabián Vidoletti.

SÍNTESIS MUNDIAL es una publicación del **CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS E INTERNACIONALES** perteneciente a la **FUNDACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN FEDERAL**

FUNDACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN FEDERAL: Entre Ríos 583 1º piso dpto. B - CP 2000 - Rosario - Santa Fe - Argentina.

Tel/Fax: (54) (0341) 440-0925 / 440-8968

E-mail:
cepi@funif.org.ar
rosario@funif.org.ar

URL: http://www.funif.org.ar

SINTESIS MUNDIAL

SUMARIO

EDITORIAL ____ 1

BREVES DEL MUNDO ____ 3

AMÉRICA DEL NORTE
Tatiana Santori
Política antidrogas en EE.UU. ____ 4

Mariana Perotti
La reforma sanitaria de Obama ____ 5

AMÉRICA LATINA
Mariana San Martín
Mes "Cumbre" en Sudamérica ____ 6

Ingrid Goette
Las bases en Sudamérica ____ 8

MEDIO ORIENTE
Ornela Fabani
Elecciones en Afganistán ____ 10

ASIA PACÍFICO
Guillermo Borella
Violencia étnica en China ____ 12

SÍNTESIS MUNDIAL

EDITORIAL

El mes de Agosto fue para el continente americano un tiempo de encuentros y reuniones cumbres con el objetivo declarado de mantener la estabilidad regional.

La primera reunión que se destaca es la llevada a cabo durante los días 9 y 10 de agosto entre los "tres amigos" del Tratado de Libre Comercio de Norte América (TLCAN), Canadá, Estados Unidos y México. La misma tuvo lugar en la ciudad mexicana de Guadalajara y es la tercera de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN) desde su creación en 2005. Esta instancia de diálogo busca promover la cooperación entre los tres países en los terrenos de la seguridad, desarrollo, medio ambiente y energía, por lo que cuenta con comisiones trinacionales especializadas en temas como la migración, el comercio, la seguridad fronteriza y la administración de justicia, entre otras. Se cree que la ASPAN es una consecuencia lógica del TLCAN que se erige como necesidad de realizar un trabajo coordinado en algunos tópicos de interés común que requieren de una atención conjunta. Sin embargo, las críticas al desempeño de la misma no se disimulan: México es el primero en reclamar la falta de iniciativas encaminadas a mejorar la calidad de vida de sus sociedades, sobre todo la suya, y por la concentración en torno a temas de seguridad en lugar de la prosperidad. Este inconveniente se ve agravado por la imposibilidad de llegar a consensos importantes y necesarios entre las comisiones, motivo por el cual la cumbre reunió solamente a los tres primeros mandatarios y no contó con los miembros de las mismas.

Teóricamente el objetivo final de la agenda actual de la Alianza es proteger a América del Norte de amenazas externas, prepararla para hacerle frente a las mismas y mantener el tráfico fronterizo en niveles de bajo riesgo para un mejor control del mismo. La cooperación sería la estrategia pertinente para trabajar en materia de terrorismo, accidentes y desastres naturales, por lo que incluir en la agenda pasos para uniformar las políticas ambientales, criterios de salud, cuidado en el manejo y producción de alimentos, inversión en educación y tecnología, y facilidades para el movimiento de bienes y personas entre los tres países es visto por sus hacedores como una instancia ineludible. Pero sus detractores ven en la ASPAN un eje de amenaza de intervención a la soberanía de Canadá y México por parte de los Estados Unidos, sobre todo en el

país azteca pues hay que tener en cuenta una posible renovación más intensa de la iniciativa Mérida.

Por otro lado, y más abajo en el mapa, se llevaron a cabo a inicios y fines de mes dos cumbres de la UNASUR que merecieron la atención de toda la región. Ambas se centraron en la controvertida cuestión de la instalación de varias bases militares norteamericanas en suelo colombiano, presentadas como instancia de trabajo bilateral en la lucha contra el narcoterrorismo entre Colombia y los Estados Unidos. Referenciada como tarea continuadora del Plan Colombia, la instalación de dichas bases generó una candente polémica que se hizo sentir en la primera reunión y se respiró profundamente en la segunda. Si bien a la ciudad de Quito el presidente Uribe no asistió y la reunión versaba sobre otras cuestiones, el giro temático fue inevitable por lo que pareció necesario llamar a una reunión de emergencia que pueda sentar bases mínimas de negociación. La postura de la mayoría de los mandatarios reunidos en la Patagonia argentina fue casi unánime: rechazo a una posible injerencia norteamericana en la región y preferencia por propuestas regionales como más aptas para solucionar los problemas que aquejan a la región. A pesar de los intentos, el presidente colombiano dejó en claro que su país no está en condiciones de negar esta ayuda que considera fundamental en la lucha contra el narcotráfico y que no cederá en esta cuestión ni ante los pedidos del foro ni del Consejo de Defensa de la UNASUR.

El temor que parece estar flotando en el aire latinoamericano gira en torno a que tanto las iniciativas como la instalación de bases en suelo colombiano representen intentos por parte de la administración norteamericana de querer mantener en su “patio trasero” una hegemonía que en algún momento se creyó perdida. Y esto, lamentablemente, tiene asidero en la creencia que hay en los EEUU de una real conexión entre la seguridad nacional de su país y la lucha contra el narcotráfico y la narcoguerrilla.

La importancia de esta presunción radica en asumir el reto de enfrentar de manera conjunta las problemáticas de la región, efectivizando grados básicos de autonomía decisional en cuestiones vitales para el proceso de unificación latinoamericana.

LUCIANA RODRIGUEZ

Cambios en Japón.

Las elecciones para la Cámara Baja de Japón dieron como resultado una gran sorpresa. Por primera vez en 54 años se termina la hegemonía del Partido Liberal Demócrata, que se convierte en la segunda fuerza parlamentaria. Su rival, el Partido Demócrata, obtuvo 308 de los 480 escaños que integran la Cámara.
La generación de tradicionales diputados del PLD se ha visto reemplazada por jóvenes (entre ellos, muchas mujeres). Se espera que este nuevo Parlamento elija como Primer Ministro al líder del PD, Yukio Hatoyama, ya que su partido controla también el Senado.
Este vuelco histórico del 28 de agosto es resultado del descontento de la población con la incapacidad del Gobierno para salir de la actual crisis que sufre el país. Entre los

problemas que aquejan al pueblo japonés se pueden mencionar la enorme deuda pública, el desempleo, las desigualdades sociales y la baja natalidad y el envejecimiento de la población que se traduce en la asfixia del presupuesto de la seguridad social.
En política exterior, el futuro gobierno tiene por objetivo impulsar una relación menos sumisa a EE. UU., así como mejorar los vínculos con países vecinos como China y Corea del Sur. ❑

El misterio del Artic Sea

El pasado 24 de julio fue secuestrado en aguas territoriales suecas por supuestos piratas, el barco de bandera maltesa, Artic Sea, que había zarpado de Finlandia con destino a Argelia. El buque, que llevaba una carga de madera de 2 millones de U$S y 15 tripulantes rusos, fue rescatado semanas después cerca de Cabo Verde por la Armada rusa.
La versión oficial rusa argumentó que fueron cuatro estonios, dos letones y dos rusos que se encontraban en una lancha, los piratas que se apoderaron del Arctic. Los inciertos motivos del secuestro levantaron innumerables sospechas, sobre todo cuando el presidente ruso, Medvedev ordenó a su ministro de Defensa tomar todas las medidas necesarias para rescatar inmediatamente al Arctic.
Días después, fuentes europeas denunciaron que en realidad el Artic transportaba un cargamento de misiles tierra-aire que Irán habría comprado a la mafia rusa. La fuente afirmaba que los misiles habrían sido cargados en el enclave ruso de Kaliningrado y que un servicio secreto, probablemente el Mossad, habría secuestrado el Artic, haciendo que el Kremlin decidiera detener al buque, movilizando la mayor operación naval desde la crisis de los misiles en Cuba.❑

Liberan al terrorista de Lockerbie.

El libio Abdul Baset Ali al-Megrahi, después de haber sido condenado a cadena perpetua en 2001, fue puesto en libertad por la justicia escocesa. Al-Megrahi es la única persona condenada por el atentado de Lockerbie, Escocia, donde en 1988 una bomba hizo estallar un avión de PanAm que se dirigía a EE.UU., dejando 270 personas muertas.
La controversial medida fue llevada a cabo, de acuerdo con

las autoridades escocesas, por razones humanitarias, ya que Al-Megrahi sufre un cáncer terminal de próstata. La decisión, se llevó a cabo a pesar de las presiones ejercidas por EE.UU., para que el libio continuara en la cárcel.
Luego de ser liberado, Al-Megrahi fue recibido por una multitud en Trípoli, Libia, lo que causó una gran indignación en los familiares de las víctimas.
El gobierno británico inmediatamente expresó su malestar por el recibimiento que Libia dio a al-Megrahi, y salió a desmentir todos los rumores que sostenían que la liberación del libio esta relacionada con ocultos intereses económicos existentes entre Reino Unido y Libia. ❑

POR TATIANA SANTORI

ACTUAL POLITICA ANTIDROGAS EN EE.UU.

La política exterior de Barack Obama: principales desafíos en la lucha antinarcóticos

El estilo de Barack Obama, dialoguista y desestructurado, ha generado expectativas de cambio al interior de EE.UU. y en la comunidad internacional.

Hasta el momento, y dado su poco tiempo en el cargo de Presidente de los Estados Unidos, sólo podemos basarnos en expresiones de deseo y voluntad, las cuales le han significado un gran apoyo. A pesar de ello, existen muchas voces escépticas acerca de su capacidad de modificar las directrices principales de la política exterior norteamericana y, en este caso, su relación con México.

Además de apostar al consenso en relación a los otros actores internacionales, Obama sostiene que las instituciones multilaterales, únicas garantes del derecho y de las normas internacionales, tendrán un rol activo a lo largo de su gobierno. Ello se ha visto plasmado en la última Cumbre de las Américas de Trinidad y Tobago, realizada abril de 2009, ocasión en la cuál admitió errores por parte de su país, mostrando su disposición al diálogo en temas complejos, como es la relación con Cuba.

Lineamientos de política exterior

El modo en que Barack Obama encara la agenda internacional muestra un fuerte pragmatismo destinado a dar solución concreta a los diferentes problemas y a cobrar cierto prestigio perdido durante años de intervencionismo. Pero lo cierto, es que hasta el momento las políticas aplicadas sólo han sido golpes de efecto que no han modificado en profundidad el verdadero rol hegemónico de los Estados Unidos. Tal es el caso del cierre de la prisión de Guantánamo, que se ha llevado adelante con una gran celeridad; en contraposición con el retiro de las tropas de Irak, que hasta el momento no son más que meras expresiones de voluntad.

Podemos apreciar entonces cómo la actual administración enfrenta el desafío de actuar responsablemente a nivel internacional desde una concepción multilateral y, a la vez, satisfacer las demandas internas que llevan a contraponerlo a dicha manera de actuar, como son las políticas ejecutadas por los grupos conservadores en función a la temática del narcotráfico.

El caso de México: el Plan Mérida

El Plan Mérida surgido en 2007 y firmado entre el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, y de México, Felipe Calderón, contempla el entrenamiento de las fuerzas mexicanas bajo el esquema americano, abarcando la provisión gratuita de armas para combatir el narcotráfico y cursos de formación a los agentes antidroga mexicanos, con un programa de tres años por 1.400 millones de dólares, además de intercambio de información y recursos. Esta plataforma se traduce en una acción coordinada de militarización en nombre de la seguridad, que necesariamente implica un proceso de mayor participación de los Estados Unidos. Esta participación se da en cua-

tro niveles: primero, en el planeamiento de medidas nacionales y locales de seguridad; segundo, en el entrenamiento de policías y tropas del ejército y de los cuerpos de investigación; tercero, en la ejecución de acciones y políticas de seguridad y cuarto, de "guerra contra el narcotráfico" en territorio mexicano.
Dicho Plan es visto por la opinión pública internacional como la continuación del Plan Colombia, y tendría objetivo de ampliar la hegemonía de los Estados Unidos en la región, y que ha servido para cercenar derechos individuales a la vez que le brinda a los respectivos poderes ejecutivos un mayor poder, relativizando contrapesos y transparencias.
Una de las consecuencias de la implementación de este plan ha sido el rebrote de una actitud anti-estadounidense por parte de un número considerable de mexicanos.

La responsabilidad compartida: ¿cambio de paradigma?

La concepción de Barack Obama en este tema representa un nuevo enfoque que reconoce una responsabilidad compartida con respecto al flagelo del narcotráfico. Esta nueva visión de la actual administración apunta a trabajar para reducir la demanda de drogas ilegales en Estados Unidos, más allá de lo que plantea el Plan Mérida.
Algunos funcionarios del gobierno, como por ejemplo la prosecretaria de Estado adjunta Roberta Jacobson, propusieron que Estados Unidos realice esfuerzos tendientes a aumentar las operaciones de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego en la zona de la frontera con México, junto con la intensificación de los programas de prevención del uso de drogas y su tratamiento para reducir la demanda de estupefacientes.
Todo ello se basa, fundamentalmente, sino en un cambio de actitud, al menos en un cambio en la perspectiva a partir de la cual se basa Estados Unidos para diseñar su estrategia antidrogas. En este sentido, sería interesante que dicho cambio discursivo pueda ser cristalizado en políticas concretas y eficaces para erradicar esta amenaza.

LA REFORMA SANITARIA DE OBAMA

POR MARIANA PEROTTI

Obama se enfrenta a su mayor desafío político luego de asumir como presidente de EE.UU.
La necesaria reforma del sistema sanitario de su país es su gran oportunidad para ser recordado como un protagonista de la historia, o puede ser su gran fracaso.
Actualmente, el sistema de salud en el país norteamericano se gestiona de manera privada. En la última década, el costo de los seguros médicos se duplicó. Esto genera que de los 300 millones de norteamericanos, unos 46 millones no tengan cobertura médica y que unos 25 millones posean una cobertura inadecuada. Además, el país invierte en salud casi el doble de lo que invierten otros países desarrollados. Este gasto implica anualmente el 16% de su PBI.
El objetivo de Obama, por el cual ganó una enorme cantidad de votos en las elecciones, es brindar una mayor y mejor cobertura. Por esto, propone fomentar la competencia a través de la creación de un plan de seguro sanitario público que brinde asistencia médica a los ciudadanos que no tienen cobertura. Esta idea causó gran oposición por parte del Partido Republicano y de las empresas aseguradoras y farmacéuticas. También de la clase media que, acostumbrada a destinar una parte de sus ingresos a cubrir su seguro médico, teme que esta reforma sea costeada con un aumento de impuestos.
Lo cierto es que el costo político de un fracaso puede ser altísimo. Ya varios años antes, Bill Clinton intentó llevar adelante una reforma semejante que tropezó con la oposición y acabó archivada.
Sobre todo, lo que lo puede llevar al fracaso es la exigencia por parte de los demócratas de reformar la totalidad del sistema, hacerlo pretendiendo que se apruebe la opción pública y concretarlo antes de fin de año.
Mientras el debate en la opinión pública contiúa, el proyecto se tratará en el Congreso a partir del 8 de setiembre, fecha en que se reanuden las sesiones.❑

MES "CUMBRE" EN SUDAMÉRICA

POR MARIANA SAN MARTIN

La Cumbre de UNASUR realizada el pasado 10 de agosto en la ciudad de Quito, Ecuador, auguraba ser una celebración para el proceso de integración regional. Sin embargo se convirtió en un foro de debate improductivo para la estabilidad pacífica de América del Sur.

Las expectativas sobre la reunión realizada en el histórico Convento de San Agustín estaban puestas en la doble asunción de Rafael Correa: como Presidente reelecto democráticamente de Ecuador y como Presidente pro-témpore de UNASUR. Recibió el mandato de UNASUR de manos de la Presidente de Chile, Michelle Bachelet, quien ocupaba el cargo desde mayo de 2008.

La asunción presidencial ante la Asamblea Nacional siguió el cauce normal en ceremonias de ésta índole, con la presencia de once presidentes del mundo y de Felipe de Borbón, heredero de la Corona española, como testigos de esta celebración democrática en América Latina. En cambio, durante la III Cumbre Ordinaria de UNASUR, si bien estaban previstas sólo las intervenciones de Bachelet y Correa, el Presidente venezolano Hugo Chávez dejó de lado el protocolo para despertar un prolongado debate latente entre Colombia, Venezuela y Ecuador, el cual ha sido reavivado este último mes con la supuesta instalación de bases estadounidenses en Colombia para colaborar en la lucha contra el narcoterrorismo.

Ahora bien, Álvaro Uribe, presidente de Colombia, fue un protagonista ausente en la reunión, habiendo argumentado que no había garantías para su seguridad personal en la ciudad de Quito, dada la ruptura de relaciones diplomáticas de su país con Ecuador el pasado mes de marzo de 2008 tras la incursión y bombardeo de un campamento de las FARC en territorio ecuatoriano por parte de tropas colombianas. Vale destacar que, previo a la realización de la Cumbre, Uribe realizó una gira por siete países de América Latina para explicar su acuerdo militar con Estados Unidos. En la misma obtuvo apoyo por parte de Perú y Uruguay, cuyos presidentes no asistieron a la Cumbre, como así también de parte de Paraguay y Chile.

Como es de esperar, de Evo Morales y Hugo Chávez partieron graves acusaciones contra Uribe como las de "traidor" a la integración sudamericana, durante la reunión. Asimismo, Venezuela volvió a denunciar la incursión militar colombiana en su territorio y manifestó su desagrado frente a acusaciones del gobierno de Suecia por desvío de sus compras de armas venezolanas hacia las FARC. Más allá de estas discusiones, Chávez había ordenado anteriormente la vuelta de su embajador Márquez a Colombia. Por esto, no se esperaban mayores exabruptos durante el debate en la cumbre de Quito. Sin embargo, estas esperanzas fueron frustradas dado que las disquisiciones en torno al tema colombiano fueron subiendo de tono durante el acto hasta el punto de que Chávez amenazara con la posibilidad de una guerra regional si se instalan las bases en Colombia. En contraposición, el primer mandatario brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, apoyó el diálogo diplomático en la región e incluso propuso que se invitara a ser parte del mismo al gobierno de Estados Unidos para discutir en torno de la relación de este país con Sudamérica en conjunto. Si-

guiendo esta línea de propuestas, la presidente argentina Cristina Fernández invitó a la realización de una Cumbre Extraordinaria en su país para el 28 de agosto. Por su parte, el vicecanciller de Colombia, representante del país durante la reunión, defendió el acuerdo militar y anunció que Uribe estaría dispuesto a asistir a la reunión de emergencia en Argentina para discutir sobre el "problema de la seguridad" en la región, pero no a discutir el emplazamiento de las bases, dado que Colombia no tiene la obligación de someter sus negociaciones bilaterales a consideración ni de UNASUR, ni del Consejo de Defensa.

En definitiva, la Declaración de Quito sólo recogió el rechazo unánime al golpe de Estado en Honduras y el apoyo al presidente depuesto, Manuel Zelaya; el compromiso para la creación de Consejos de Infraestructura y Planeamiento, Lucha contra el Narcotráfico, Educación, Ciencia, Tecnología e Innovaciones y Desarrollo Social; instructivos para que el Consejo Energético de UNASUR defina un plan de acción. A su vez también se dispuso que los Ministros de Defensa deberán trabajar en vistas de la consolidación del Banco del Sur, de un fondo común de reserva y la posibilidad de un sistema de pagos y compensaciones regionales. Y por último se acordó un firme compromiso para impulsar la creación de una ciudadanía sudamericana y un Consejo Sudamericano de Derechos Humanos; como también para hacer operativo el concepto de la supremacía de la salud pública sobre intereses económicos y comerciales. Vale destacar que, tras horas de debate, el acuerdo necesario para alcanzar la aprobación del proyecto de resolución presentado por Bolivia en torno al rechazo por parte de UNASUR a la instalación de bases extrarregionales en Sudamérica, no fue logrado. El tema fue pospuesto para tratarse en la Cumbre Extraordinaria y en la futura reunión Ministros de Defensa y de Relaciones Exteriores de UNASUR.

Esta esperada Cumbre Extraordinaria se llevó adelante en San Carlos de Bariloche el pasado 28 de agosto, siendo trasmitida por la televisión pública argentina (medida que no recibió el apoyo de todos los mandatarios presentes), contando, esta vez, con la asistencia de los doce presidentes sudamericanos. Las declaraciones hostiles intercambiadas entre los mismos durante las semanas anteriores a la realización de la Cumbre provocaron que se llegara con ánimos caldeados, por lo cual se esperaba un debate subido de tono entre los mandatarios. Sin embargo, las discusiones se llevaron a cabo con moderación y respeto, si bien las perspectivas eran incompatibles: Bolivia, Venezuela y Ecuador reclamaban el rechazo unánime por parte de UNASUR del acuerdo colombiano-estadounidense e incluso Chávez presentó un documento del Departamento de Estado que hablaría sobre la intención de las bases militares de ser parte de un plan más amplio de intervención de Estados Unidos en la región. Por su parte, tanto Lula da Silva como Cristina Fernández promovieron nuevamente el diálogo diplomático entre pares. Asimismo, el Presidente brasileño mantuvo conversaciones previas con los presidentes de Venezuela, Colombia, Bolivia e incluso con Barack Obama con la intención de atemperar los ánimos en Sudamérica.

En esta ocasión, el Presidente Álvaro Uribe se hizo presente llevando adelante un extenso discurso con el cual contestó acusaciones de sus pares y reclamó a la región la ausencia histórica de cooperación práctica con el gobierno colombiano en materia de narcoterrorismo. A su vez, decidió rechazar el pedido de los mandatarios sudamericanos de hacer público el conflictivo acuerdo con Estados Unidos.

La Declaración de San Carlos de Bariloche, si bien no hizo mención explícita al tema de las bases militares emulando a la anterior Declaración de Quito, instó al Consejo de Defensa de UNASUR a reunirse durante el mes de septiembre. El objetivo de esta reunión será estudiar el asunto y promover mecanismos de confianza mutua y cooperación pacífica entre los países de UNASUR, a fin de consolidar el compromiso de los mandatarios de mantener a Sudamérica como una zona de paz.

Solo basta esperar, entonces, a la reunión del novel Consejo de Defensa para ver si este organismo sudamericano logra superar este escollo. Los Ministros de Defensa de la región no sólo deberán estudiar cómo recibir el acuerdo militar entre Estados Unidos y su protegido sudamericano, sino también la instauración de mecanismos de confianza entre sus países, inmersos muchos de ellos en una carrera armamentista, a fin de evitar futuros conflictos en torno a la seguridad regional que sean paralizadores del avance del proceso de integración.

LAS BASES EN SUDAMÉRICA

POR INGRID GOETTE

Son numerosas las intervenciones que Latinoamérica ha sufrido a lo largo de su historia tanto por parte de la gran potencia del norte como de diversos países de Europa. Cuando a fines de los años 80 parecía estar superada esta etapa de limitaciones a la soberanía de los países de América Latina, los hechos nos vuelven a sorprender. ¿Pero podemos decir que se está repitiendo la historia? ¿Es correcto hablar de intervención norteamericana a las acciones en Colombia?

Ante todo, debemos tomar en cuenta dos puntos fundamentales. El primero es la estrecha relación que existe entre Estados Unidos y Colombia, sobre todo a partir de la implementación del Plan Colombia, concebido en 1999 durante las administraciones de Pastrana y Clinton, cuyo fin principal era reducir el narcotráfico. El segundo punto es que en noviembre del corriente año vence el acuerdo que Estados Unidos tiene con Ecuador respecto al permiso otorgado para la utilización de la base aérea de Manta para operativos antinarcóticos, y que el presidente Correa se ha negado a renovar.

El gobierno de Uribe niega que las tres bases militares colombianas en las cuales se dispondrán a operar fuerzas militares estadounidenses sean una suerte de reemplazo de la base de Manta, la cual desde que se devolvió el Canal de Panamá, era un centro de operaciones vital para Estados Unidos en la región, siendo la única base que mantiene en Sudamérica. Según funcionarios colombianos, el actual acuerdo se basaría en la cooperación entre ambos Estados para reforzar la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, en el marco del plan que se viene llevando a cabo desde hace varios años de manera conjunta. Desde la cancillería colombiana se afirma que dicho acuerdo no es en detrimento de la soberanía, ni se trata de una base militar norteamericana en territorio colombiano, como así que tampoco será permitido el tránsito de tropas extranjeras por dichas instalaciones. Explicaron también que a diferencia de Ecuador sobre Manta, Colombia tendrá plena soberanía sobre sus bases. No obstante, al no tener que alquilar las bases como lo hacía en Ecuador, Estados Unidos no deberá cargar con la responsabilidad política de una base propia.

Este posible acuerdo entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos ha generado innumerables críticas y una fuerte polémica en toda Sudamérica, y sobre todo, en los países vecinos.

El Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, declaró que procedería a revisar las relaciones que mantiene con Colombia ya que la existencia de tropas norteamericanas en bases de aquél país serían una gran amenaza para el Estado venezolano. Dijo que esta situación podría iniciar una guerra en Sudamérica y no dudó en comenzar por declararle una guerra comercial a su vecino.

De manera muy similar a las declaraciones de Chávez, el Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, se refirió a la presencia de tropas norteamericanas en Colombia como una ocupación y una amenaza.

Las manifestaciones del presidente Correa, por su parte, fueron alarmantes al dejar asentado que si Colombia repitiese una acción militar en territorio ecuatoriano como la que sucedió a principios del 2008, habría una guerra.

Por otro lado, el presidente de Bolivia, Evo Morales, condenó duramente a Uribe cuando expresó que los políticos que aceptan una base militar norteamericana en cualquier país de Latinoamérica son "traidores de su patria".

Fidel Castro no dejó de expresar su pensamiento respecto a la situación cuando expuso que las tres bases colombianas en las cuales podría operar Estados Unidos forman parte de un tenebroso plan que busca

crear cinco bases más alrededor de Venezuela, bajo el pretexto de sustituir la base de Manta en Ecuador. También apoyó el rearme de Venezuela con el objetivo de enfrentar los emplazamientos en Colombia, y aclaró que Venezuela no se arma contra el pueblo hermano de Colombia, sino contra el "Imperio", que ya habría intentado destruir la Revolución Bolivariana, y ahora pretendería instalar en las proximidades de la frontera venezolana sus sofisticadas armas.

Lula da Silva junto con Michelle Bachelet no consideran favorable la instalación estadounidense en las bases colombianas, pero aseguran que no buscan crear ningún tipo de conflicto con Uribe ni con el gobierno norteamericano, y que la decisión de llegar o no a un acuerdo con los Estados Unidos es una decisión soberana del gobierno colombiano. El presidente de Paraguay, Fernando Lugo, también recalcó la importancia de respetar la soberanía que cada país posee para tomar sus propias decisiones.

Cristina Fernández, por su parte, afirmó que lo importante es bajar el nivel de conflicto en la región y que la instalación de las bases estadounidenses no colabora con este objetivo.

El presidente Barack Obama, por su parte, aseguró que no tiene planes de establecer una base militar en Colombia. Aclaró que el acuerdo con Colombia es sobre seguridad, vigente desde hace ya muchos años y que solo ha sido actualizado.

El clima de tensión que generó la negociación con Estados Unidos sobre las bases prácticamente obligó al presidente Uribe a iniciar una gira por Sudamérica, en la cual visitó Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay, Chile, Perú y Uruguay, en busca de dialogar e intentar clarificar el acuerdo con Washington y otros temas relacionados al terrorismo en Colombia. Su objetivo era mantener un buen clima de relaciones, reduciendo las discrepancias, y no quedar aislado del resto de los países sudamericanos por limitar, tanto al este como al sudoeste, con vecinos hostiles a su política. Las entrevistas durante la gira obtuvieron diferentes respuestas. Bolivia y Argentina se posicionaron desde una visión más crítica sobre el uso de las bases, mientras que Perú y Chile presentaron una postura más conciliadora, observando al acuerdo como un proyecto soberano de Colombia. La posición brasileña fue intermedia, buscando mantener un equilibrio entre sus relaciones con Venezuela, con Colombia y también con Estados Unidos, y un perfil de mediador.

Uribe buscó no quedar solo ante las supuestas injerencias por parte de Venezuela y Ecuador. Una de estas injerencias vendría de parte del gobierno de Venezuela a través de la venta de armas a las FARC. Esta sospecha surgió cuando fue encontrado en un campamento del grupo terrorista, armamentos de la compañía sueca Saab Bofors Dinamics, que habían sido vendidos décadas atrás a Venezuela. El gobierno venezolano respondió que esta incriminación forma parte de un nuevo show mediático que se enmarca en un aparato propagandístico mundial por parte de Estados Unidos, como si fuera una película clase B del gobierno estadounidense. Por otro lado, y en relación a los vínculos de las FARC con gobiernos latinoamericanos, tampoco hay que olvidar el video que fue difundido hace sólo un par de meses donde se mostraba a uno de los líderes del grupo terrorista comprometiendo al Presidente ecuatoriano como uno de los inversionistas principales que financiarían la guerrilla en Colombia.

A modo de conclusión, es necesario decir que si bien las negociaciones para finalizar el acuerdo han sido llevadas a cabo, el acuerdo en sí todavía no ha sido firmado. El mismo reafirmaría el compromiso de las partes en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Sin duda, ambas partes sacarán su ventaja de dicho arreglo. Por el lado de Estados Unidos, seguiría manteniendo, pese al cierre de Manta, una presencia en la zona, fundamental para sus intereses. Además, Colombia es el único país aliado que le queda a Estados Unidos en la zona andina. Asimismo, el gobierno de Estados Unidos ha desmentido en varias ocasiones los dichos del Presidente Chávez sobre que el objetivo final de este acuerdo desembocaría en una invasión a Venezuela. No obstante, hay que reconocer que presentarlo de esa manera es políticamente conveniente para el Presidente venezolano. Por el lado de Colombia, Uribe afianzaría su relación con el gobierno de Obama, y además, no hay que dejar de lado que el acuerdo tiene un fuerte significado simbólico, ya que demostraría su cercanía con una superpotencia militar y lograría un importante efecto disuasivo frente a Venezuela, que se ha armado de manera constante y considerable en los últimos años. Tampoco hay que olvidar la preparación respecto a la información en inteligencia y los suministros en tecnología que las fuerzas militares colombianas recibirían por parte de los norteamericanos.❑

ELECCIONES EN AFGANISTÁN

POR ORNELA FABANI

El 20 de agosto pasado en el marco de un clima de gran expectativa a nivel internacional se llevaron a cabo elecciones presidenciales en Afganistán, figurando como principales rivales el actual presidente Hamid Karzai y el ex Ministro de Relaciones Exteriores, Abdullah Abdullah.

Ahora bien, más allá de la satisfacción expresada por la Unión Europea, los Estados Unidos y la OTAN, estas elecciones han sido muy controversiales. Esto se puede comprobar en la incesante violencia que el día de las elecciones se cobró por lo menos 26 muertos, en que ambos candidatos se autoproclaman como vencedores y además que existen graves denuncias de fraude efectuadas por observadores de estos comicios.

Respecto al primer punto, vale destacar que, tras un fallido intento boicot de las elecciones, los talibán efectuaron más de 130 ataques armados para interrumpir el proceso en las 34 provincias. Dichas acciones fueron emprendidas pese al despliegue y la vigilancia reforzada de cien mil militares de Estados Unidos y la OTAN y doscientos mil efectivos gubernamentales.

Por otra parte, como ya se ha señalado, los dos principales candidatos enfrentados, Karzai y Abdullah, se han declarado públicamente como vencedores. No obstante, la Comisión Electoral Independiente de Afganistán hasta el momento sólo ha revelado los primeros resultados parciales de los comicios. Los resultados definitivos recién se darán a conocer entre el 17 y el 21 de septiembre próximo.

Las complicaciones estriban en que los datos de los más de seis mil colegios electorales habilitados se trasladan primero a la capital provincial y, de allí, al centro de recuento nacional, situado en Kabul. Luego, la Comisión Electoral anuncia esas estadísticas provincia por provincia, lo cual llevará semanas. Al respecto, este organismo ha advertido que "cualquier resultado no anunciado por la Comisión Electoral Independiente será no oficial, inexacto y jurídicamente nulo y sin efecto".

Para evitar mayores disputas o declaraciones cruzadas y confusas la Comisión interrumpió el 27 de agosto las informaciones de resultados parciales y comunicó que reportará más adelante cómo avanzan los escrutinios preliminares. Es importante señalar que hasta el 27 último sólo se habían contabilizado el 17,2% de los colegios electorales. De acuerdo con ese conteo, el presidente Hamid Karzai contaba con una ventaja de 10 puntos sobre su rival, con el 44,8% de los votos frente al 35,1% de Abdullah Abdullah.

De confirmarse esta ventaja, tendrá que efectuarse

una segunda vuelta a principios de octubre al quedar los resultados por debajo del 50% o mayoría simple requerida por la Constitución. En este sentido, existe un gran temor a que la necesidad de tener que efectuar una segunda vuelta entre el presidente Karzai, representante de la etnia mayoritaria pastún, y Abdullah Abdullah, de la minoría tayika, siembre las semillas de una nueva guerra civil.

En relación a las denuncias de fraude el presidente de la Comisión Electoral de Quejas, organización que está controlando el proceso electoral, ha informado sobre la existencia de 225 quejas formales por supuestas irregularidades durante los comicios. En este caso, el catálogo de denuncias va desde falsificaciones en las urnas a intimidaciones, votación múltiple, voto condicionado y rellenado de urnas.

Asimismo, la FEFA (Free and Fair Election Foundation of Afghanistan), principal organización independiente afgana de observadores electorales, fue otra de las entidades que hizo manifiestos dichos reclamos. El día de las elecciones la FEFA desplegó 6.968 observadores, en los aproximadamente 6.200 colegios electorales abiertos en el país. En este contexto, estos funcionarios aseguran haber encontrado muchas irregularidades, como por ejemplo votantes con varias tarjetas y votando en nombre de mujeres o votos de menores de edad. Incluso se informó que, en algunos lugares, hombres armados maltrataron al personal de la Comisión Electoral y tomaron el control de los centros de voto. De hecho, ni siquiera la Comisión Electoral, escapa a las críticas de la FEFA que la acusa de parcialidad en favor del presidente saliente Hamid Karzai. Según altos representantes de la citada organización, en algunas regiones, la Comisión Electoral se aprovechó del analfabetismo de los votantes para desviar votos en provecho del mismo.

En cuanto al presidente Karzai, cabe recordar que ingresó en Kabul para encabezar el gobierno interino con el beneplácito norteamericano en diciembre del 2001, y se afianzó en la administración con los comicios del 2004, en los cuales fue proclamado vencedor con un 55,4% de los votos. Actualmente, el primer mandatario ha sido sujeto de gravísimas acusaciones por parte de quienes alegan que en su afán de ser reelegido, buscó el respaldo de personajes relacionados con crímenes de guerra, corrupción y narcotráfico, entre ellos su acompañante de fórmula para vicepresidente, el mariscal Muhammad Qasim Fahim.

En definitiva, vemos como la tan esperada práctica democrática es rápidamente ensombrecida por la incertidumbre del resultado, las denuncias de fraude contra el actual presidente y las perspectivas ciertas de la continuación de la guerra, 30 años después de haber luchado contra los soviéticos y ocho después de la primera derrota de los talibanes.

A pesar de que los Estados Unidos y la Alianza Atlántica mantienen desplegados en Afganistán 94 mil hombres, agrupados en el comando de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad, los altos comandantes que trabajan en la zona pretenden incluso incrementar el número de efectivos. De acuerdo a los mismos las fuerzas militares emplazadas en la región permanecen por debajo de las necesidades operativas.

Este reclamo en pos de un incremento del número de soldados podrá comprenderse si se considera que Agosto de 2009 se ha convertido en el mes más letal para las tropas estadounidenses en Afganistán desde el comienzo del conflicto en 2001.

En este marco de conflicto, el advenimiento de un sistema democrático estable y pacífico y la retirada norteamericana de la región no se vislumbran entre los pronósticos razonables.❑

EL CANDIDATO A LA PRESIDENCIA ABDULLAH ABDULLAH SE AUTOPROCLAMA GANADOR, AL IGUAL QUE EL PRESIDENTE KARZAI

VIOLENCIA ÉTNICA EN CHINA

POR GUILLERMO BORELLA

La tensión étnica que se vive desde hace décadas en la región china noroccidental de Xinjiang, cuna de la minoría musulmana uigur, estalló a principios de julio pasado con toda violencia en la capital regional, Urumqi. Estos enfrentamientos dejaron 184 muertos, cerca de 1000 heridos y más de 1.400 detenidos, como consecuencia de la gran represión ejercida por las fuerzas de seguridad del gobierno chino. Las revueltas se desataron cuando miles de manifestantes uigures pedían que se investigase un enfrentamiento con los han (etnia mayoritaria en China), el cual se había producido en el mes de junio en una fábrica de la ciudad de Shaoguan, provincia sureña de Guangdong, donde murieron dos miembros de la minoría musulmana.
La gravedad de la situación llevó a que el presidente chino, Hu Jintao, abandone la cumbre del G-8 que se estaba desarrollando en Italia y regrese a su país para hacerse cargo de la situación.
Estos incidentes han quebrado el frágil equilibrio étnico en Xinjiang, y se considera que han sido los más violentos desde la represión estudiantil en la plaza de Tiananmen, hace 20 años.
¿Quiénes son los uigures?
La etnia uigur es una de las 55 minorías nacionales de China, que en total suponen apenas el 9% de su población. El 91% restante de los 1.350 millones de chinos pertenecen a la etnia han. Los uigures practican la religión musulmana y viven principalmente en Xinjiang, la región más occidental de China, que oficialmente se denomina Región Autónoma Uigur.
Los uigures poseen un profundo sentimiento nacionalista, fortalecido sobre todo desde 1949 cuando las tropas del ejército de Mao, luego de ganar la Guerra Civil, entraron en Xinjiang y pusieron fin a la independencia de la llamada República del Turkestán Oriental, que desde 1933 gobernaba el destino de los uigures. Desde entonces, la región ha sido cuna de un movimiento separatista.
Xinjiang ha sufrido en los últimos años crecientes tensiones étnicas, alimentadas por el abismo económico y social que separa a uigures y los ahora mayoritarios han, privilegiados por Pekín, que fomenta su emigración a zonas conflictivas para alterar en su favor el equilibrio demográfico. En la actualidad, los uigures apenas alcanzan la mitad de la población de Xinjiang, de ahí proviene el malestar creciente por lo que llaman la "hanización" de sus costumbres. Al mismo tiempo, muchos uigures sienten un gran resentimiento contra el gobierno de Pekín que desde los 90 ha venido aplicando severas políticas represivas, entre ellas, la discriminación y el no respeto de su libertad religiosa. De hecho, la constante inmigración de población han a Xinjiang constituye la principal causa del malestar uigur tanto por su volumen (dado que la población han se ha multiplicado por 25 en las últimas décadas) como por las consecuencias que conlleva: desplazamiento de los uigures, transformación irreversible del entorno y fortalecimiento de las políticas de asimilación y disolución de la identidad uigur.
Naturalmente, como en el caso de Tíbet, el resentimiento de esta comunidad turcomana ha estallado en una brutal violencia. Pero el caso de Xinjiang cuenta además con un crítico componente económico, puesto que el vasto territorio (fronterizo entre otros con Rusia, Pakistán, Afganistán e India) alberga grandes reservas petrolíferas y es el mayor productor de gas en China.
De esta manera, los incidentes de los últimos días en Urumqi deben ser interpretados como una nueva muestra del incontenible malestar uigur y de la tensión en sus relaciones con los chinos de la etnia han, cuya violenta respuesta durante las protestas es un elemento no-

vedoso y que presagia un panorama crecientemente tenso y conflictivo en la región.

Los gravísimos sucesos ocurridos han puesto de nuevo en cuestión la política de nacionalidades del gobierno y del Partido Comunista de China, un régimen alérgico a cualquier tipo de disidencia que repite con resultados catastróficos un modelo de trato a sus minorías basado en la represión. Ha pasado en Tíbet y ocurre estos días en la provincia de Xinjiang, a más de 3.000 kilómetros de Pekín.

Acusaciones cruzadas

A raíz de estos sucesos, el gobierno chino ha lanzado una intensa campaña diplomática contra Rebiya Kadeer, líder uigur en el exilio, similar a la que ha venido empleando con el Dalai Lama, a tal punto que algunos la han comenzado a llamar "La Dalai Lama de los uigures". En este sentido, el gobierno chino ha venido acusando a Kadeer de estar detrás de los incidentes. Ella es la cabeza visible tanto del Congreso Mundial Uigur con sede en Munich, como de la Asociación Uigur Americana con sede en Washington. Sin embargo, la activista ha negado rotundamente su complicidad replicando a las acusaciones de Pekín que la identifican como la principal inspiradora de las protestas en Urumqi.

Rebiya Kadeer es una mujer de negocios uigur que tras pasar varios años encarcelada en China por su actividad independentista, y luego de ser liberada debido a las presiones de Washington, se exilió en 2005 en Estados Unidos. Desde ese momento se ha convertido en la voz en el extranjero del sufrimiento de su pueblo.

Pekín pretende evitar que la figura de la líder uigur adquiera importancia como consecuencia de las revueltas étnicas. En este sentido, las autoridades chinas expresaron su descontento a naciones que, como Japón, le autorizaron la entrada a Kadeer. Por la misma razón, han expresado también su malestar al Gobierno de Australia, donde asistió a la proyección de un documental sobre su vida. Al mismo tiempo, se le advirtió también a los Estados Unidos, al pedirle que evite que se utilice su territorio para llevar a cabo "actividades separatistas contra China", en clara alusión a Kadeer. Además se pronunció en contra de Turquía, cuyo Primer Ministro, Recep Tayyip Erdogan, describió la violencia étnica en la región china de Xinjiang como "una especie de genocidio".

Por otra parte, el gobierno chino aseguró que los disturbios en Urumqi fueron actos premeditados perpetrados por musulmanes uigures, entre los que se hallaban "activistas separatistas" que recibieron entrenamiento de Al Qaeda y otras organizaciones terroristas internacionales. En este sentido, cabe recordar que después de los ataques del 11-S se intensificó la persecución de los agentes chinos contra los uigures, acusando a algunos de sus líderes de tener vínculos con Al Qaeda y siendo encarcelados en Guantánamo.

Balance

La manifestación uigur de Urumqi no puede interpretarse más que como un acto de cólera y desesperación de una comunidad frente a su duro presente y, sobre todo, su incierto futuro. Sin embargo, las posibilidades de obtener algún resultado más allá de un caos momentáneo son improbables para los uigures. Además, y como indicio del posible carácter espontáneo de las protestas, no estuvieron acompañadas de revueltas similares en otras ciudades. Por lo tanto es muy difícil creer que los manifestantes uigures conserven expectativas de estar dando el primer paso hacia la constitución de un Turkestán oriental independiente, un anhelo compartido por la mayor parte de los uigures, pero completamente quimérico en el contexto actual.

El problema de fondo sigue radicando en el modelo político. Para un partido que se organiza conforme al centralismo democrático resulta en extremo complicado creer en la descentralización. En uso de un discurso típico de los regímenes dictatoriales, Pekín acusa a agentes extranjeros de fomentar los disturbios con fines separatistas, más específicamente a la líder activista exiliada en Washington, Rebiya Kadeer. Pero la realidad tiene que ver sobre todo con la incapacidad del Partido Comunista de China para lidiar de forma civilizada con cualquier tipo de discrepancia. De esta manera, seguirá sin resolverse el problema de la necesaria integración armoniosa de la comunidad uigur en la estructura de la República Popular China y seguirán sembrándose los motivos para un potencial conflicto de mayor gravedad en los próximos tiempos.❑